

**TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR:** San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día nueve de enero de dos mil diecinueve.

I. Mediante escrito presentado el día 07/04/2017, la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, en aplicación del artículo 143 letra d) de la Ley de Protección al Consumidor (en adelante LPC), interpone denuncia contra la proveedora S.A. de C.V., propietaria del establecimiento identificado como “Chalet” dentro del colegio

; por posibles incumplimientos a la LPC.

Las supuestas infracciones administrativas se documentaron en el acta de inspección de fs. 3, en la cual consta que en el referido establecimiento, en fecha 01/02/2017, se tenía a disposición de los consumidores productos con posterioridad a su fecha de vencimiento y productos sin fecha de vencimiento, los cuales se detallan en los formularios para inspección de fs. 4 y 5, respectivamente.

Según lo expone la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, los hallazgos antes relacionados podrían tipificarse como un incumplimiento a lo prescrito en el artículo 27 letra d) de la LPC en relación a los numerales 5.8.1 y 5.8.3 del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados) -RTCA 67.01.07:10-, y art. 14 de la LPC, dando lugar, en dicho orden, a las infracciones establecidas en los artículos 43 letra f) y 44 letra a) de la LPC, las cuales, en caso de comprobarse, implicaría la imposición de las sanciones previstas en los artículos 46 y 47, respectivamente, de la misma ley.

Respecto al supuesto cometimiento de la infracción determinada en el art. 44 letra a) de la LPC, este Tribunal debe hacer las siguientes consideraciones:

A. La Sala de lo Constitucional, mediante sentencia pronunciada a las catorce horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de abril del año dos mil seis, en el proceso de amparo número 134-2005, señaló que *el principio de proporcionalidad exige que los medios soberanos utilizados en las intervenciones del Estado en la esfera privada, deben mantener una proporción adecuada a los fines perseguidos.*

Además, determinó que *la proporcionalidad de una regulación o acto ha de establecerse con referencia al objeto de protección y ordenación intentado en cada supuesto, con íntima vinculación al derecho fundamental que resulte o pudiere resultar lesionado.*

Dentro de la misma sentencia, la Sala en mención señaló como elementos del principio de proporcionalidad los siguientes: (i) la idoneidad de los medios empleados; esto es, que la duración e intensidad de los mismos deben ser los exigidos por la finalidad que se pretende alcanzar; y, (ii) la necesidad de tales medios; es decir, que se debe elegir la medida menos lesiva para los derechos fundamentales, la que permita alcanzar la finalidad perseguida con el menor sacrificio de derechos e intereses del afectado.

En definitiva, se destaca que uno de los elementos del principio en referencia, es *la ponderación de intereses, a fin de determinar la existencia de un relación razonable o proporcionada de la medida con la importancia del bien jurídico que se persigue proteger.*

En ese sentido, este principio va dirigido a realizar un juicio relacional entre el bien jurídico tutelado y el daño que podría causar el acto o la resolución que se dicte. Se propugna así que la afectación del interés particular guarda relación razonable con el daño o la importancia del interés colectivo que se trata de salvaguardar, por lo que, en supuestos como el que se analiza, ante una afectación mínima del interés general, la Administración deberá abstenerse de crear un daño mayor al administrado a través de la sanción

**B.** En casos como el planteado, en el que se denuncia el hallazgo de producto con posterioridad a su fecha de vencimiento, en contravención a lo estipulado en el artículo 14 de la LPC; resulta importante mencionar que al efectuar un análisis del caso en particular, se observa que el despliegue de la actividad administrativa para el inicio y tramitación de la denuncia presentada por la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC, en relación al daño causado, resultaría desproporcional, ya que se trata de un producto.

**C.** Y es que, si bien consta en la correspondiente acta de inspección se ha documentado un posible incumplimiento a lo establecido en los preceptos mencionados, el hallazgo plantea una situación de *mínima incidencia en el sistema integral de protección al consumidor*, careciendo de evidente trascendencia, intensidad y magnitud para afectar sustancialmente los bienes jurídicos protegidos.

Por las razones expuestas, este Tribunal estima que en este caso no procede iniciar una acción administrativa sancionatoria contra la proveedora , S.A. de C.V., por el incumplimiento observado.

**Lo sostenido no significa que el Tribunal avale los incumplimientos a la ley, sino que solo ante situaciones de mínima incidencia y valor pecuniario, se debe evitar poner en marcha el aparato estatal en materia administrativa sancionatoria, razón por la cual, la reiteración de otras denuncias en este mismo sentido, ameritará el inicio del procedimiento sancionatorio, no importando la cantidad de productos que se encuentren en tal condición.**

D. Ahora bien, en relación a los productos sin fecha de vencimiento detallados en el formulario de inspección de folio 5, es necesario puntualizar en lo siguiente:

El artículo 7 de la LPC, determina como una obligación de los proveedores que desarrollan actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios, para no arriesgar la vida, la salud, la seguridad de las personas y el medio ambiente, *observar las normas legales, reglamentarias o técnicas que se dictaren sobre la materia*. Por su parte, la sección 5 del RTCA 67.01.07:10 establece la información obligatoria que deberá de contener la etiqueta de los alimentos preenvasados, entre la cual se encuentra la fecha de vencimiento de conformidad a los artículos 5.8.1 y 5.8.2 del citado reglamento.

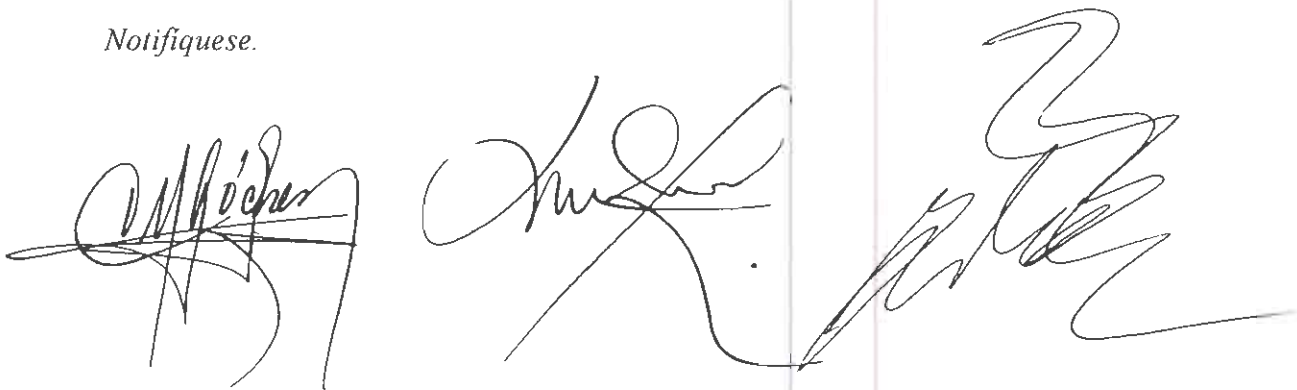
Así, la citada norma técnica se relaciona de forma directa con la obligación general de información consignada en el artículo 27 de la LPC, que determina, que los bienes y servicios *puestos a disposición de los consumidores* deben ser proporcionados con información en castellano, de forma clara, veraz y oportuna, según corresponda; señalando especialmente, entre otros aspectos, la letra d) "*Fecha de caducidad de los bienes perecederos...*". En consecuencia, el incumplimiento de un proveedor en los términos expuestos constituye infracción al artículo 43 letra f) de la LPC, por: "*Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normativas técnicas vigentes*".

De lo anterior se desprende que dicha conducta ilícita se materializa por ofrecer bienes o productos que incumplan con las normas técnicas vigentes. Para el caso en estudio, el término ofrecer a que hace reseña la ley se refiere al hecho de contar con una serie de bienes y productos dentro de un establecimiento con el ánimo de comercializarlos al público

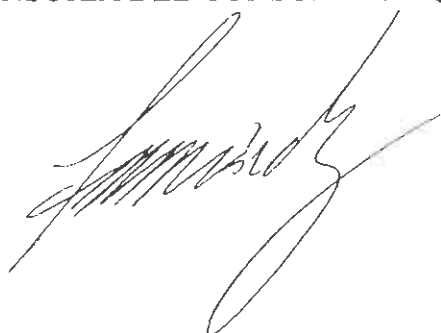


b) *Declarar improponible* la denuncia interpuesta por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor en contra de \_\_\_\_\_, S.A. de C.V., por el supuesto cometimiento de la infracción contenida en el artículo 43 letra f) de la LPC.

*Notifíquese.*



PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN.



S/mp.

